

## Antecedentes históricos

El derecho penal internacional y los tribunales penales internacionales tienen su referente más cercano en los albores del siglo xx con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando parte de los acuerdos de los potencias vencedoras implicó la conformación de una “Comisión sobre la responsabilidad de los Autores de la Guerra”, conformada por 15 miembros, que trataría de violaciones al Derecho de la Guerra y la Humanidad y la responsabilidad de los poderes centrales<sup>143</sup>. Al final, la Comisión recomendó: que los altos oficiales, incluido el káiser Guillermo II de Hohenzollern, deberían ser enjuiciados por ordenar los crímenes que se cometieron sobre la base de la responsabilidad de mando; y establecer un Alto tribunal con miembros de los poderes aliados<sup>144</sup>.

Como resultado, el Tratado de Versalles estableció en su artículo 227 que el káiser sería públicamente procesado “por la ofensa suprema contra la moral internacional de la santidad de los Tratados”. Sin embargo, esta cláusula del Tratado no fue implementada debido a que Holanda se negó a entregar al káiser a los Aliados indicando que las ofensas tenían carácter político<sup>145</sup>.

143 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. 2a. ed. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 115.

144 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 116.

145 Ibid.

Los artículos 228 y 229 del Tratado de Versalles también previeron la persecución penal contra nacionales de Alemania por crímenes de guerra ante las Cortes de los Aliados, pero tampoco esas disposiciones se pusieron en práctica. Los únicos intentos que funcionaron, aunque con bastantes críticas por razones de ausencia de imparcialidad, fueron los llamados juicios de Leipzig llevados a cabo entre el 23 de mayo y el 16 de julio de 1921, donde seis personas fueron enjuiciadas y seis absueltas<sup>146</sup>, de manera que tampoco se cuenta como un buen ejemplo de Justicia penal internacional.

Tras estos dos intentos, hubo una nueva iniciativa de enjuiciar a los *Young Turks* responsables de la masacre de los armenios en Turquía entre 1915-1916. Algunas Cortes marciales especiales en Estambul enjuiciaron a unos pocos, aparentes responsables sin jerarquía o mando en la planeación y ejecución de los hechos, y algunos otros fueron juzgados en ausencia de suerte, que es un intento solo parcialmente afortunado de impartir justicia internacional<sup>147</sup>.

En el recuento histórico de los antecedentes del derecho penal internacional también se cuenta el proyecto elaborado para el establecimiento de una Corte Permanente de Justicia Internacional, que debería ser competente también para conocer violaciones contra las leyes universales de las naciones y el orden público internacional. Sin embargo, la Asamblea de la Liga de las Naciones rechazó la propuesta por considerarla prematura<sup>148</sup>.

La soberanía de los Estados fue un impedimento para avanzar en el juzgamiento internacional. No fue posible encontrar un mecanismo confiable para hacer comparecer a los presuntos criminales ante los estrados judiciales; pero, pese a ello, tales iniciativas constituyeron lecciones aprendidas para lo que sería después las experiencias de Núremberg y Tokyo<sup>149</sup>, los primeros tribunales internacionales que efectivamente cumplieron con su mandato.

146 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 116.

147 CASSESE, Antonio, et al. *Cassese's International Criminal Law*. 3a. ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 254.

148 CASSESE, Antonio, et al. *Op cit.* pp. 254-255.

149 CASSESE, Antonio, et al. *Op cit.* p. 255.

## Tribunales penales internacionales

### *Tribunales Penales Militares Internacionales de Núremberg y Tokyo*

#### Tribunal de Núremberg

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de Moscú de 1943 incorporó una cláusula que preveía el castigo de los criminales de guerra, pero luego, la idea sería superada en Londres, donde los poderes Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética) elaboraron el borrador de una Carta de un Tribunal Internacional que sería la base para el posterior Tribunal de Núremberg, creado el 8 de agosto de 1945, tras la suscripción por parte de los Aliados del Tratado de Londres, que sería posteriormente adoptado también por otros 19 Estados<sup>150</sup>.

El Tribunal tuvo ocho jueces (cuatro principales y cuatro suplentes). La acusación fue recibida el 10 de octubre de 1945<sup>151</sup>. Contuvo cargos por los tres tipos de crímenes de competencia del Tribunal: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad<sup>152</sup>.

Los acusados fueron altos mandos de las diferentes ramas del régimen Nazi. Su selección, sin embargo, fue pragmática y arbitraria, criterios como el simple hecho de estar en custodia fueron tenidos en cuenta. No es posible asegurar que todos lo máximos responsables del nazismo vivos fueron llevados ante el Tribunal<sup>153</sup>. Los juicios duraron 10 meses y ocuparon 403 sesiones. De 24 acusados, 22 efectivamente comparecieron ante el Tribunal; 3 fueron absueltos, 12 condenados a muerte, 7 condenados a prisión (entre 10 años y prisión perpetua). Después de las primeras condenas, 12 juicios más –con 177 acusados– se llevaron a cabo entre 1946 y 1949 pero ante autoridades militares de Estados Unidos<sup>154</sup>.

150 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmschurst. *Op. cit.*, p. 117.

151 Ibid, p. 118.

152 *Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg* (1945), art. 6.

153 *From Nuremberg to The Hague. The road to the International Criminal Court*. Nuremberg: Nuremberg Human Rights Center, 2011, p. 9.

154 Ibid, p. 10.

## Tribunal de Tokyo

Paralelo a la iniciativa de Núremberg, el 26 de julio de 1945, los ‘cuatro grandes’ suscribieron la Declaración de Potsdam donde anunciaron su intención de impartir justicia sobre los líderes japoneses por crímenes graves. Consecuentemente, el 19 de enero de 1946 el general Douglas MacArthur, Supremo Comandante de los Poderes Aliados en Japón, aprobó bajo la forma de orden ejecutiva, la Carta de Tokyo (26 de abril), estableciendo allí la constitución del Tribunal, su jurisdicción y funciones. Al igual que el Tribunal de Núremberg, Tokyo conoció de crímenes contra la paz y contra la humanidad<sup>155</sup>.

Los juicios ante el Tribunal de Tokyo iniciaron en el 3 de mayo de 1946 y duraron aproximadamente dos años y medio<sup>156</sup>. Se conformó por once jueces de distintas nacionalidades (Australia, Canadá, China, Francia, Nueva Zelanda, Holanda, Reino Unido, la Unión Soviética, India y Filipinas). El gran juicio empezó el 29 de abril de 1946 con la acusación de 28 personas con cargos como crímenes contra la paz, conspiración y crímenes de guerra. El fallo encontró a todos los acusados culpables; siete fueron condenados a muerte, uno a siete años de prisión y el resto a prisión perpetua<sup>157</sup>.

La labor de estos dos tribunales ha sido criticada por constituir una forma de ‘justicia de los vencedores’ sobre los vencidos. La crítica recae sobre dos elementos: el primero, norma procesal y sustancial aplicadas tendientes a favorecer a los vencedores como la flexibilización del principio de no retroactividad de las normas. El segundo, la vulneración de principios elementales de justicia toda vez que los tribunales solo juzgaron una parte del conflicto<sup>158</sup>.

Pese a las críticas, estos tribunales han sido considerados importantes en diversos factores: (i) rompieron el paradigma según el cual ciertos crímenes como los de guerra solo eran juzgados por los Estados, y en cambio, instituciones internacionales o multinacionales asumieron la persecución penal; (ii) nuevos tipos de crímenes fueron considerados, como los crímenes contra la paz y los crímenes de

155 CASSESE, Antonio, et al. Op cit. p. 257.

156 Ibid.

157 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. Op. cit., p. 123.

158 SCHABAS, William. Victor's justice: selecting 'situations' at the International Criminal Court. *JOHN MARSHALL LAW REVIEW*. vol. 43, p. 535-536

lesa humanidad; (iii) por primera vez altos mandos militares fueron enjuiciados y condenados, así como políticos de alto rango y civiles influyentes; (iv) los tribunales contribuyeron al desarrollo de nuevos estándares legales y especialmente en materia de responsabilidad penal, con medidas como la eliminación de la defensa por obediencia al superior; y (vi) han sido funcionales simbólicamente<sup>159</sup>.

#### Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY)

Una vez finalizados los juicios de Núremberg y Tokyo, la naciente Justicia Penal Internacional tuvo un largo receso que en parte es atribuido a la Guerra Fría. Sin embargo, paralelamente, el movimiento a favor de los Derechos Humanos fue incrementándose exigiendo justicia en casos de graves vulneraciones, y luego confluyó la caída del muro de Berlín con la que, entre otras cosas, se revivió la idea de una Corte Criminal Internacional<sup>160</sup>.

Así, la primera muestra de este nuevo giro del Derecho internacional fue el establecimiento del TPIY en mayo de 1993, dicho inicio ha sido calificado como la primera muestra de derecho penal internacional, sin la idea de la justicia de los vencedores, pues fue establecido por el consenso internacional representado en las Naciones Unidas y sin un aparente ganador en la guerra de los Balcanes para ese entonces<sup>161</sup>.

El conflicto de lo Balcanes tiene como punto de partida la desintegración de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, que inició con la muerte de Josip Tito en 1980, quien en la práctica había gobernado el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra tuvo carácter internacional al involucrar a Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina (BiH), pero igualmente, fue una guerra civil en BiH, donde bosnio-croata, bosnio-serbio y bosnio-musulmán se enfrentaron entre sí<sup>162</sup>.

159 CASSESE, Antonio, et al. *Op cit.* p. 258.

160 SCHABAS, William. *Op. cit.* p. 535-536

161 Ibid. 537.

162 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Designing Criminal Tribunals: Sovereignty and International Concerns in the Protection of Human Rights*. Inglaterra: Ashgate, 2006. 189 p.pp. 32-33.

WILLIAMS, Sarah. *Hybrid and Internationalized Criminal Tribunals. Selected Jurisdictional Issues*. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2012.p. 18.

Croacia (el más férreo opositor de Serbia) y Eslovenia fueron los primeros en declarar la independencia en 1991, seguidos de Macedonia y BiH en 1992. Las separaciones de Eslovenia y Macedonia fueron relativamente pacíficas, pero la política de considerar a los serbios como minoría en Croacia y tomar ciertas medidas en su contra desató el ataque del remanente de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), recrudeciendo la guerra hasta enero de 1992, cuando con el auspicio de las Naciones Unidas se firmó un acuerdo de paz. Situación similar se vivió en BiH donde los serbios allí residentes decidieron luchar por mantener Yugoslavia unida y construir una ‘Gran Serbia’, lo que escaló el conflicto. Igualmente Kosovo, que para ese entonces era provincia autónoma junto con Vojvodina, sufrió una arremetida serbia para tomar control del país, lo que significó una nueva ola de violencia y que terminaría con el control de la zona por parte de las Naciones Unidas en 1999 y la independencia de Kosovo en 2008<sup>163</sup>, lo que se ampliará más adelante<sup>164</sup>.

La preocupación de la comunidad internacional creció, de manera que en octubre de 1992, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció una Comisión de Expertos que estableció un informe sobre la situación en la zona para el Secretario General en enero de 1993 y entregó su informe final en 1994, concluyendo que graves violaciones al Derecho Humanitario habían tenido lugar, incluyendo homicidios premeditados y masivos, limpieza étnica, violencia sexual, tortura y destrucción de la propiedad, entre otros crímenes. Igualmente, sugirió la creación de un tribunal especial para conocer tales crímenes<sup>165</sup>.

Basado en tal recomendación de la Comisión y basado en las disposiciones del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad estableció en TPIY mediante Resolución n°. 827 del 25 de mayo de 1993<sup>166</sup>, la cual indica que el Tribunal ha sido creado con la “finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia entre el

163 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* pp. 18-19.

164 La Guerra de los Balcanes tendría un final a través del Acuerdo de Paz de Daytona que incluiría el compromiso de los Estados de cooperar con el TPIY. CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 132.

165 Williams, Sarah. *Op. cit.* pp. 31

166 Williams, Sarah. *Op. cit.* pp. 33

1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz”<sup>167</sup>.

La competencia material concreta comprende cuatro tipos de crímenes: violaciones graves contra los Convenios de Ginebra de 1949; violación a las leyes o los usos de la guerra, el genocidio y crímenes de lesa humanidad<sup>168</sup>. En 1995, el Tribunal decidió que tendría competencia sobre crímenes de guerra de conflictos tanto de carácter internacional como nacional. Las competencias territoriales y temporales se refieren al territorio que comprendía la antigua Yugoslavia y al 1 de enero de 1991 en adelante<sup>169</sup>.

El Estatuto del TPIY contiene la cláusula de jurisdicción concurrente, de acuerdo con la cual, este y los tribunales nacionales concurren para enjuiciar a las personas a las que se refiere el Estatuto, pero adiciona que el TPIY tiene primacía sobre los tribunales nacionales, de suerte que “en cualquier etapa del procedimiento, el Tribunal Internacional podrá pedir oficialmente a los Tribunales nacionales que convengan en la competencia del Tribunal Internacional de conformidad con el presente Estatuto y con las normas sobre el procedimiento y prueba del Tribunal Internacional”<sup>170</sup>.

El TPIY se compone de tres organismos principales: la Oficina de Registro, la Oficina del Fiscal y las Salas de Primera Instancia y de Apelaciones. Cada Sala de Primera Instancia se comprende de tres jueces, en tanto que la Sala de Apelaciones cuenta con cinco<sup>171</sup>.

Hacia el año 2000, los jueces del TPIY concluyeron que su trabajo podría tomarles al menos hasta 2016, lo cual se estimó excesivo, de manera que sugirieron al Consejo de Seguridad una estrategia de conclusión que implicó una serie de pasos: el primero, la creación de jueces *ad litem* que conocerían de un caso. 27 jueces fueron autorizados por el Consejo de Seguridad. El segundo paso fue contratar abogados senior, en lugar de jueces, para tratar ciertos asuntos respecto a los procesos antes del juicio. Tercero, se expandió la Cámara de Apelaciones, a ello se sumó la

167 United Nations, *Security Council Resolution No. 827* (1993).

168 Ibid. art. 2-5.

169 Ibid. art. 8.

170 Ibid. art. 9.

171 Ibid. art. 12.

creación de la Regla 11 *bis* en las Reglas de Procedimiento y Prueba del TPIY en virtud de la cual el TPIY puede transferir casos a los Tribunales nacionales<sup>172</sup>.

El caso más significativo del TPYI ha sido la condena contra Dusko Tadic, presidente del Comité Local de Kozarac del partido Serbio Democrático para la época de los hechos, quien sería condenado a 20 años de prisión por homicidios premeditados, tortura y tratos inhumanos. La condena se profirió el 14 de julio de 1997 y se confirmó en segunda instancia el 26 de enero de 2000<sup>173</sup>.

#### Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)

Tras la experiencia del TPIY, y la tragedia que significó el genocidio, fue discutida la necesidad de crear un tribunal análogo para Ruanda. Para tal efecto, la ONU estableció una comisión de expertos que aconsejó la creación del Tribunal<sup>174</sup>, en la Resolución n° 935 de 1994.

El genocidio consistió en la persecución que inició la comunidad Hutu en contra de los Tutsi, tras el asesinato del presidente de ascendencia Hutu en 1994, recrudeciendo los rencores entre dos comunidades separadas desde las colonias alemana y belga en territorio ruandés. Al final, se considera que entre 500.000 y un millón de ruandeses fueron asesinados en solo 100 días partiendo desde el 7 de abril de 1994<sup>175</sup>.

El establecimiento del TPIR fue decidido por el Consejo de Seguridad siguiendo el modelo del TPIY. Sin embargo, Ruanda -como miembro del Consejo para ese entonces- votó en contra de su creación para que ciertas solicitudes fueran rechazadas: inclusión de la pena de muerte, exclusión de crímenes diferentes al genocidio y jurisdicción anterior a 1994<sup>176</sup>.

El Consejo de Seguridad sentó las bases de su competencia para establecer el TPIR, en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas<sup>177</sup>. Mediante

172 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 134.

173 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Case information sheet. Dusko Tadic*, s.f.

174 Ibid. p. 139.

175 CARDONA CHAVES, Juan Pablo. Justicia Transicional En Perspectiva Comparada: Colombia y Ruanda, Dos Escenarios De Justicia Maximalista. [Anónimo] *Constitutionalismo Científico*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012. 55 p.

176 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 139.

177 *Carta de las Naciones Unidas*, Capítulo VII. Acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.



la Resolución n° 955, adoptada el 8 de noviembre de 1994<sup>178</sup>, y aduciendo el requerimiento inicial surtido por el Estado de Ruanda, se estableció el TPIR con el único propósito de investigar y sancionar a las personas responsables por el genocidio y otras graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables por genocidio y otras violaciones cometidas en el territorio de los Estados vecinos, competencia *ratione personae* and *loci*, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994<sup>179</sup>, competencia *ratione temporis*. En la misma resolución, se anexa el Estatuto de Tribunal, que también precisa su competencia *ratione materiae*: genocidio art. 2; crímenes de lesa humanidad art. 3; violaciones al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II, adicional art. 4.

El artículo 8 del Estatuto cobra especial relevancia en el tema *sub examine* en la medida en que prescribe la jurisdicción concurrente del TPIR, que significa que tanto el Tribunal como las Cortes nacionales de Ruanda tienen jurisdicción para procesar personas de acuerdo a la competencia ya señalada, otorgando prevalencia al TPIR para conocer de los casos, de manera que en cualquier instancia del proceso, el Tribunal puede solicitar formalmente a las Cortes nacionales el envío de los casos y consecuentemente asumir la competencia sobre ellos<sup>180</sup>. Su primacía se reafirmó tras la adopción de la Regla 11 *bis*, que como ya se observó, faculta al Tribunal de enviar casos a las Cortes nacionales<sup>181</sup>.

El Estatuto prevé, igualmente, la estructura del Tribunal de la siguiente manera art.10: las Cámaras -comprendidas por dos Cámaras de Primera instancia y una de Apelaciones compartida con el ICTY para asegurar consistente jurisprudencia entre los dos Tribunales<sup>182</sup>- el Fiscal<sup>183</sup> y la Oficina de Registro (Secretaría).

El Estatuto ordena a los jueces usar el reglamento del TPIY que rige el procedimiento en lo que tiene que ver con la acusación, los trámites de primera

178 United Nations Security Council Resolution 955 Establishing the International Tribunal for Rwanda (with Annexed Statute), S.C. res. 955, 49 U.N. SCOR at \_\_, U.N. Doc. S/RES/955 (1994).

179 United Nations Security Council Resolution 955. *Op cit.*

180 United Nations Security Council Resolution 955. Annex, Statute of the International Tribunal for Rwanda. *Op cit.*

181 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmschurst. *Op. cit.*, p. 140.

182 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmschurst. *Op. cit.*, p. 139.

183 Originalmente, el mismo Fiscal era compartido por el ICTY y el ICTR hasta 2003 cuando el ICTR nombró su propio Fiscal. CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmschurst. *Op. cit.*, p. 140.

instancia y los recursos, así como la recepción de las pruebas, la protección de las víctimas y de los testigos, entre otros asuntos procesales; aunque permite a los jueces del ICTR adoptar eventuales modificaciones al Reglamento<sup>184</sup>. Respecto del Fiscal y la Secretaría, el primero es responsable de la instrucción de los expedientes y de la acusación y se considera autónomo e independiente dentro del Tribunal<sup>185</sup>, en tanto que la segunda cuenta con un Secretario encargado de asegurar la administración y los servicios del Tribunal<sup>186</sup>.

Al menos dos diferencias iniciales en material de competencia pueden establecerse entre el ICTY y el ICTR. En materia de crímenes de lesa humanidad el Tribunal de Ruanda exige que haya habido *discriminación* como elemento subjetivo para que se configure la conducta. En cuanto a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el ICTR restringe su competencia a aquellas que corresponden a Conflictos armados no internacionales<sup>187</sup>.

El Tribunal, ubicado en Arusha (Tanzania), empezó labores en febrero de 1995. Al principio enfrentó problemas logísticos como contratación de personal pero pese a ello, la primera acusación se llevó a cabo en noviembre de 1995. La cooperación de otros Estados africanos contribuyó para que los procesos contra Georges Rutaganda y Jean-Paul Akayesu se abrieran el 30 de mayo de 1996<sup>188</sup>.

El primer resultado importante -en términos de la jerarquía del implicado- fue la condena en contra de Jean Kambanda, Primer Ministro de gobierno para la época del genocidio, quien se declaró culpable, pero que igualmente fue condenado a prisión perpetua en mayo de 1998<sup>189</sup>. Más adelante, se produjo el primer juicio sin allanamiento a cargos previos del procesado: entre septiembre y octubre de 1998 sería condenado Jean-Paul Akayesu por genocidio y graves violaciones al DIH en un juicio en el que por primera vez se aplicó expresamente la

184 United Nations Security Council Resolution 955. Annex, Statute of the International Tribunal for Rwanda. *Op cit.*, art. 14.

185 United Nations Security Council Resolution 955. Annex, Statute of the International Tribunal for Rwanda. *Op cit.*, art. 15.

186 United Nations Security Council Resolution 955. Annex, Statute of the International Tribunal for Rwanda. *Op cit.*, art. 16.

187 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 140.

188 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 140.

189 Ibid. P.140.

Convención Internacional contra el Genocidio y se estableció la gravedad de la violencia sexual y su relación con el genocidio<sup>190</sup>.

El fallo se divide en tres decisiones: el 2 de Septiembre de 1998, la Sala de Primera Instancia I profiere la decisión condenatoria en la cual encuentra a Jean-Paul Akayesu culpable de genocidio e instigación directa y pública a cometer genocidio, de crímenes de lesa humanidad, exterminio, homicidio intencional, tortura, violación y otros actos inhumanos. Un mes después, el 2 de octubre del mismo año, la Sala decide la pena imponiendo prisión perpetua, fallo que sería apelado por la Defensa y resuelto por la Sala de Apelaciones el 1 de junio de 2001, la cual, tras adelantar audiencias entre el 1 y 2 de noviembre de 2000, confirmó el fallo de primera instancia, negó los fundamentos de la apelación y consecuentemente, confirmó la pena de prisión perpetua<sup>191</sup>.

#### Cortes híbridas, mixtas o internacionalizadas

En paralelo con los dos Tribunales mencionados, nuevos desarrollos en material de justicia penal internacional se suscitaron aunque con un nuevo carácter. Se trató del establecimiento de las cortes internacionalizadas o híbridas<sup>192</sup>. En parte, el nuevo modelo de cortes representó una reacción frente a las críticas elevadas contra el TPIY y el TPIR, que en esencia pueden resumirse en cuatro: (i) el alto costo de su funcionamiento; (ii) la demora excesiva de sus procedimientos; (iii) su lejanía respecto del lugar donde los crímenes han tenido lugar y consecuentemente el bajo impacto de sus decisiones en las comunidades afectadas; y (iv) la ausencia de juicios contra los máximos responsables de los crímenes<sup>193</sup>.

Más de constituir una respuesta a los problemas presentados por las experiencias anteriores de Justicia Penal Internacional, al menos dos razones explican la creación de las cortes híbridas:

- i) En primer lugar, tienden a establecerse tras situaciones de emergencia como conflictos armados o guerras civiles por motivos políticos,

190 Ibid. P. 141.

191 CORTÉS, Edwin. Judicialización de la Violencia Sexual Basada en Género [VSBG] en la Primera Sentencia Proferida por Genocidio. Caso Fiscal Versus Jean-Paul Akayesu TPIR. [Anónimo] *Decisiones Judiciales*. Bogotá: GIZ; Defensoría del Pueblo, 2013. pp. 130-141.

192 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 181.

193 CASSESE, Antonio, et al. *Op cit.* p. 265.

étnicos o religiosos, entre otros, con la intención de impartir justicia por los crímenes cometidos, contribuir con el proceso de post conflicto y evitar la repetición de los hechos en el futuro.

- ii) En segundo lugar, pueden surgir cuando la situación ha implicado el colapso del aparato de Administración de Justicia o este no es suficientemente fuerte para encarar el número y la gravedad de los casos a asumir.

A ellas se suman las ventajas de contar con un tribunal situado en el lugar de los hechos victimizantes, lo que puede implicar que la comunidad sea plenamente consciente de lo sucedido, un proceso de catarsis sano para las víctimas mediante la plena y pública identificación de los perpetradores, pero también un eventual proceso de reconciliación<sup>194</sup>.

No obstante las razones que justifican su existencia y el hecho de constituir un intento por mejorar la idea de los tribunales internacionales, las cortes mixtas pueden tener serios problemas en su funcionamiento: la dificultad de articular el trabajo del personal nacional e internacional, eventuales barreras por el idioma, mentalidad y tipo de experiencia. Igualmente, recursos para su funcionamiento y seguridad son desafíos<sup>195</sup>.

Las cortes híbridas son bastante diferentes unas de otras dependiendo del contexto y situación a la cual obedecen. Por ejemplo, las Cortes de Sierra Leona, Cambodia y Líbano fueron creadas mediante acuerdo entre las Naciones Unidas y los respectivos gobiernos post conflicto (aunque el acuerdo con Líbano entró a regir mediante resolución de Consejo de Seguridad). Respecto a su estructura, mientras las Cortes de Cambodia y Senegal forman parte del sistema doméstico de sus países, las Cortes de Líbano y Sierra Leona son cuerpos separados. En cuanto a su jurisdicción, la Corte de Líbano a diferencia de las otras tres mencionadas, no conoce de genocidio, crímenes de lesa humanidad ni de crímenes de guerra<sup>196</sup>.

Pese a sus diferencias, es posible encontrar al menos tres elementos comunes entre las cortes híbridas:

- (i) Normalmente aplican derecho nacional e internacional.

194 Ibid., pp. 265-266.

195 Ibid., pp. 266-267.

196 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 181.

(ii) Tienen composición mixta entre jueces, fiscales y expertos nacionales e internacionales.

(iii) Generalmente se sitúan en el lugar donde los crímenes tuvieron lugar<sup>197</sup>. Pese a que la literatura no es totalmente uniforme en la manera de clasificar los tipos de cortes mixtas establecidas, Donlon<sup>198</sup> propone dividir su estudio en tres categorías: la primera comprendida por aquellas cortes creadas bajo el mandato de administración de Naciones Unidas (Paneles Especiales para Crímenes Graves en Timor del Este y el Panel de la llamada Regulación 64 en Kosovo). La segunda, conformada aquellas cortes creadas mediante acuerdo de los gobiernos y las Naciones Unidas, como ya se mencionó, las Cámaras Especiales en las Cortes de Cambodia, la Corte Especial para Sierra Leona y el Tribunal Especial para Líbano. En la tercera categoría estarían los organismos creados al margen del Sistema de Naciones Unidas: la Cámara para Crímenes de Guerra de Bosnia y Herzegovia y la Suprema Corte de Irak.

#### Los Paneles Especiales para Timor del Este y Kosovo

Timor del Este es uno de los países que como Kosovo y Sudán del Sur, solo recientemente ha proclamado su independencia, pero particularmente y a diferencia de otras experiencias, ha tenido que librar no una, sino dos batallas de independencia contra colonizadores. Primero, tras más de cuatro siglos de colonización portuguesa, logró su independencia en 1975, pero sería invadido por el país vecino, Indonesia, cruenta ocupación que duraría 24 años hasta 1999 cuando la presión internacional obligó a Indonesia a ceder hasta que Timor del Este logró la independencia<sup>199</sup>. Para el efecto, el 5 de mayo de 2005 se suscribió un Acuerdo entre los Ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia, Portugal y el Secretario General de las Naciones Unidas, en el cual se precisaban los términos de un referéndum<sup>200</sup> en la cual la gente votaría eligiendo entre la independencia de Timor del Este o su constitución en una región autónoma de Indonesia. El referéndum tuvo lugar el 30 de agosto de 1999 y el 4 de

197 FIDELMA, Donlon. *Hybrid Tribunals. Routledge Handbook of International Criminal Law*. London; New York: 2013. p. 85.

198 Ibid. pp. 85 - 86.

199 GUNN, Geoffrey. *Historical Dictionary of East Timor*. Plymouth: Scarecrow press, 2011. p. ix.

200 United Nations, Security Council. *Resolution 1236 May 7 of 1999*.

septiembre el Secretario General de Naciones Unidas anunció que el 78.5 % de los votos había sido a favor de la independencia, lo que desató una ola de violencia a lo largo de Timor del Este que implicó homicidios, secuestros, incendios provocados y desplazamiento forzado de familias hasta la intervención de la comunidad internacional, la cual resultó en el despliegue de una Fuerza Multinacional de Naciones Unidas (Interfet) y luego de la Misión ‘peacekeeping’ de las Naciones Unidas y el establecimiento de una Administración de Transición (Untaet) mediante resolución 1272<sup>201</sup>.

La resolución empodera a las Naciones Unidas del ejercicio de la autoridad legislativa, administrativa y judicial, a partir de las cuales la Untaet expide el Reglamento n° 11 de 2000 en el cual define la organización de las cortes en el territorio y se establece la Corte de Distrito de Dali y la Corte de Apelaciones. La Corte de Distrito fue investida de competencia para conocer seis tipos de crímenes cometidos en Timor Oriental entre el 1° de enero y el 25 de octubre de 1999, a saber: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, homicidio, violencia sexual y tortura. De acuerdo con las secciones 10.3 y 10.5 del Reglamento, los llamados ‘Paneles mixtos’ fueron conformados con composición mixta de jueces de Timor Oriental y jueces internacionales, tanto en la Corte de Distrito como en la Corte de Apelaciones<sup>202</sup>.

Cada panel consiste de tres jueces, uno de Timor Oriental y dos internacionales. En casos de especial importancia o gravedad, un panel conformado por cinco jueces, dos nacionales y tres internacionales, puede establecerse para escuchar las apelaciones. La competencia personal de los Paneles recae sobre nacionales de Timor que hayan cometido los crímenes que conoce la Corte, o cuando la víctima haya sido un nacional de Timor. Su competencia es prevalente respecto de los tribunales nacionales, de manera que un caso puede ser diferido a los Paneles desde un tribunal nacional en cualquier etapa<sup>203</sup>.

Por su parte, la Oficina Fiscal se llamó Unidad de Crímenes Graves y fue establecida mediante Reglamento n° 16 de 2000 de la Untaet. Se creó como parte de la oficina del Fiscal General ubicado en Dili. El Derecho aplicable en los casos fue mixto igualmente, tanto nacional como internacional: Derecho de Indonesia, más el derecho que poco a poco fue proferido por la Untaet e Instrumentos de derecho

201 GUNN, Geoffrey. *Op cit.* p. xxxi.

202 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 86.

203 Ibid.

internacional (incluyendo las normas de Derecho Internacional Humanitario) y reglas de la costumbre internacional<sup>204</sup>.

El 20 de mayo de 2002 se considera la fecha de la independencia de Timor Oriental e implicó el establecimiento de una nueva misión de las Naciones Unidas (Misión de Apoyo a Timor Oriental–Unmiset) que asumió las funciones de la Untaet y que continuó cooperando con la Administración de Justicia en el país hasta 2005<sup>205</sup>. Paralelo a ello, en Timor Oriental también se estableció una Comisión de la Verdad acordada con el gobierno de Indonesia, cuyo reporte fue publicado en 2008, reconociendo la responsabilidad de las fuerzas militares y de policía de Indonesia en los crímenes cometidos tras el referendo de independencia de Timor Oriental. No obstante, las recomendaciones de la Comisión se limitaron a las excusas públicas de Indonesia<sup>206</sup>.

En cuanto a sus resultados, los Paneles Especiales conocieron de 95 acusaciones remitidas por la Unidad de Crímenes Graves contra 392 personas; adelantaron 55 juicios y en total fueron condenados 84 acusados y tres fueron absueltos. Paralelamente, la Corte de Derechos Humanos AD-HOC establecida en Indonesia condenó solo seis a prisión<sup>207</sup>.

#### Reglamento 64. Paneles en los Tribunales de Kosovo

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la conformación de Yugoslavia incluyó el territorio de Kosovo aunque con el carácter de región autónoma, condición que tras el proceso de desintegración del país en los años ochenta fue controvertido ante el interés de Serbia de conservar la zona como propia. Las medidas de los serbios incluyeron tratamientos discriminatorios contra los kosovo-albanos y el forzar a la Asamblea de Kosovo a realizar reformas en detrimento de su independencia<sup>208</sup>. La situación se agravó tras llegada al poder de Slobodan Milošević

204 Ibid.

205 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 86.

206 *From Nuremberg to The Hague. The road to the International Criminal Court.* Nuremberg: Nuremberg Human Rights Center, 2011, p. 28.

207 *From Nuremberg to The Hague. The road to the International Criminal Court.* Nuremberg: Nuremberg Human Rights Center, 2011, p. 45.

208 STAHN, Carsten. *The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor: A First Analysis.* J.A. Fmwein and R. Wolfrum (eds.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 5. Netherland: Kluwer Law International, 2001, p. 116.

quien estableció una política de *apartheid* en contra de los kosovo-albanos, lo que a su vez suscitó la creación del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, según sus siglas en inglés)<sup>209</sup>. El escalamiento de la violencia solo terminó con la intervención de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en marzo de 1999. Durante la guerra, las tropas serbias desplazaron cerca de un millón de personas y aproximadamente 13.000 fueron asesinados, 80% eran kosovo-albanos. La economía rural fue igualmente afectada y miles de viviendas fueron incineradas<sup>210</sup>.

El 10 de junio de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1244 en la cual estableció el mandato de las Naciones Unidas para la Administración Interina de Kosovo (UNMIK), la cual incluyó la misión en Timor Oriental, labores administrativas, legislativas y judiciales<sup>211</sup>.

Los intentos de impartir justicia tras los hechos de la guerra no fueron fáciles. La comunidad internacional pensó en establecer una Corte Internacional que resultó descartando por el costo potencial y el rechazo de la mayoría albana de Kosovo. En su lugar, se llevaron a la región jueces y fiscales internacionales que fueron ubicados a largo del territorio de Kosovo. A diferencia de los Paneles de Timor Oriental, en Kosovo no se establecieron paneles fijos en las Cortes, en su lugar, jueces internacionales fueron situados en los diferentes tribunales del país, constituyendo paneles mixtos en los diferentes lugares<sup>212</sup>.

No obstante, los nacionales -en su mayoría albanos de Kosovo- lograron dominar en el sistema de Administración de Justicia, y en consecuencia las dudas respecto de la objetividad de las decisiones y medidas tomadas por los tribunales se incrementaron, de manera que la Unmik profirió un nuevo reglamento encaminado a mantener la paz y el naciente Estado de Derecho en Kosovo. El Reglamento n° 64 de 2000 asigna jueces y fiscales internacionales y autoriza el cambio de sede de los procesos. Así, aseguró una mayoría de jueces internacionales en los paneles híbridos a nivel nacional. El mecanismo del cambio de sede implicó la autorización a los diferentes intervinientes en el proceso de solicitar el cambio de sede o el traspaso del proceso

209 DI LELLIO, Anna et. al. Engineering Grassroots Transitional Justice in the Balkans: The Case of Kosovo. *East European Politics and Societies and Cultures*. Sage Publications, Volume 27 Number 1 February 2013, pp. 132-133.

210 Di Lellio, Anna, et. al. *Op. cit.*, p. 133.

211 STROHMEYER, Hansjorg. Collapse and reconstruction of judicial system: the United Nations Mission in Kosovo and East Timor. *The American Journal of International Law*, Vol. 95, No. 1, January 2001, p. 47.

212 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 88.



a jueces o fiscales internacionales, cuando se considere que de esa manera se garantiza la independencia e imparcialidad del juicio. Si la petición es autorizada por el Departamento de Asuntos Judiciales, el Reglamento n° 64 creará un panel compuesto por tres jueces (al menos dos internacionales) para continuar con el proceso<sup>213</sup>.

A diferencia de los Paneles de Timor Oriental, los Paneles del Reglamento 64 en Kosovo pueden conocer de cualquier tipo de crimen, de manera que han asumido competencia en casos de crímenes de guerra, terrorismo, homicidio, crimen organizado, corrupción, tráfico de personas, armas y drogas, entre otros. Su jurisdicción temporal no se reduce a una época específica, por el contrario, su jurisdicción es la misma que la de los tribunales y cortes de Kosovo<sup>214</sup>.

El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró su independencia de Serbia, seguidamente admitió la Misión Civil de la Unión Europea en Kosovo (Eulex) que asumió varias tareas que tenía Unmik. Eulex controla el programa de jueces y fiscales internacionales y, de hecho, es responsable de la ubicación de éstos en las diferentes sedes. Entre el 18 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009, los jueces de Eulex recibieron 185 procesos transferidos desde la Unmik, aún en curso sumado a casos nuevos, entre otros<sup>215</sup>.

### *Cortes creadas mediante acuerdo de los gobiernos y las Naciones Unidas*

#### Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Cambodia

Una vez transcurridos cinco años de guerra civil que dejaron cerca de cinco millones de personas muertas, las fuerzas de los Jemeres Rojos entraron a la capital, Phnom Penh, en abril de 1975 con lo cual se estableció el Estado de Kampuchea Democrática, liderado Saloth Sar -quien en el poder pasó a ser Pol Pot o el hermano número uno-. Su ideario consistía en hacer de Cambodia una sociedad completamente agraria y autárquica, procurando eliminar toda dependencia de poderes foráneos. Medidas como la exportación de los excedentes de la producción y la creación de comunidades rurales masivas fueron tomadas enfatizando

213 Ibid. pp. 89.

214 FIDELMA, Donlon. *Op. cit.* pp. 89.

215 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 90.

las virtudes de la vida del campo sobre las de la ciudad. Cerca de dos millones de personas fueron reubicadas -de las ciudades a los campos- en solo una semana. Sin embargo, la reubicación implicó privación de salarios y derechos, y se sufrió un desabastecimiento interno de alimentos debido a la política de exportación y a los costos de alimentar el ejército. Igualmente, el régimen abolió las clases sociales (todos pasaron a ser campesinos), la moneda, la educación y la religión<sup>216</sup>.

Las medidas del gobierno de los Jemeres Rojos implicaron excesivas jornadas de trabajo, negligencia o mal tratamiento de enfermedades y una menor distribución de comida a los trabajadores y a la población en general, y a ello se suma la extrema represión contra los opositores políticos. Como consecuencia, entre abril de 1975 y enero de 1979, cerca de dos millones de personas fallecieron, la mitad a causa de desnutrición y enfermedades, y el otro tanto por la política de ejecuciones<sup>217</sup>.

El régimen de los Jemeres Rojos sería derrocado en enero de 1979, cuando, tras el deseo de establecer una Gran Cambodia, y por tanto expandir su territorio, entró en conflicto con Vietnam, cuyas fuerzas entrarían en la capital tomando el control y desplazando al gobierno hacia la frontera con Tailandia, estableciendo una guerrilla. Tras los hechos, exiliados camboyanos regresaron al país y asumieron el poder. La presencia vietnamita en Cambodia duraría poco más de quince años<sup>218</sup>.

El proceso de creación de una Cámara Extraordinaria en las Cortes de Cambodia inició en 1997, seguido de una solicitud de asistencia enviada por el Gobierno de Cambodia a las Naciones Unidas para establecer un tribunal que persiguiera los crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Pese a que la situación de Cambodia estuvo en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante los años 90, China siempre anunció que vetaría cualquier medida que buscara el establecimiento de un tribunal en Cambodia, de manera que no hubo avances. Sin embargo,

216 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* pp. 34-35.

217 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* p. 35.

218 Ibid.

el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Cambodia incluyó el tema en la Asamblea General<sup>219</sup>.

Antes que las Naciones Unidas tomara una decisión respecto del caso, fue conocido en abril de 1998 que Pol Pot había fallecido. Luego, el Secretario General de las Naciones Unidas destacó a un grupo de expertos que recomendó el establecimiento de un tribunal que debería ser situado en la región del Asia Pacífico, pero no en Cambodia, en lugar de una corte en Cambodia, idea discutida pero rechazada por varias razones: ausencia de personal calificado; insuficiente infraestructura en el sistema judicial de Cambodia; ausencia de una cultura de respeto por la Administración de Justicia; ausencia de confianza de la población de Cambodia en la justicia de su país; y preocupación por la seguridad de los juicios<sup>220</sup>.

Consecuencia de las recomendaciones y una serie de reuniones entre las Naciones Unidas y el gobierno de Cambodia, un memorando de entendimiento fue adoptado mediante un intercambio de cartas entre las partes en mayo de 2000. A continuación, en diciembre del mismo año, el gobierno de Cambodia propone la Ley sobre el Establecimiento de las de Cámaras Especiales en las Cortes de Cambodia para la persecución de crímenes cometidos durante Kampuchea Democrática. La Ley fue aprobada en agosto de 2001 con el respectivo saludo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero solo hasta marzo de 2003 se terminó el acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Cambodia para llevar a cabo los términos de dicha Ley, y más tarde, este sería aprobado por la Asamblea General en mayo de 2003. El acuerdo consistía en regular la cooperación entre el gobierno de Cambodia y las Naciones Unidas, y proveía las bases y principios para dicha cooperación.

Luego de ello, se requirieron dos años más para ajustar lo necesario, entre ello, la financiación de la iniciativa. Finalmente, en mayo de 2006, jueces internacionales y de Cambodia fueron destacados y empezaron labores a finales de 2007 con la primera acusación de la Fiscalía<sup>221</sup>.

Las Cámaras Especiales ejercen su jurisdicción personal sobre aquellos máximos líderes de Kampuchea Democrática y aquellos máximos responsables de

.....  
219 Williams, Sarah. *Op. cit.* pp. 90.

220 Williams, Sarah. *Op. cit.* pp. 125.

221 Ibid. pp. 126-127.

violaciones al Código Penal de Cambodia (homicidio, tortura y persecución religiosa), el Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad, genocidio, la costumbre internacional y los Instrumentos Internacionales reconocidos por Cambodia, a saber: Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y la Convención de la Haya sobre la protección de Patrimonio Cultural (competencia material), cometidos entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979 (competencia temporal). La pena máxima permitida fue fijada en prisión perpetua, y las Cámaras aplicarían el procedimiento penal interno de Cambodia, pero adoptaron un reglamento interno propio similar al proferido por el ICTY y el ICTR<sup>222</sup>.

Las Cámaras se componen por una Cámara de Juicio, una Cámara de Pre-Juicio y una Cámara de Apelaciones. La Cámara de Juicios está compuesta por tres jueces nacionales y dos internacionales, en tanto la Cámara de Apelaciones comprende cuatro jueces nacionales y tres internacionales. Las decisiones se toman por mayoría más uno, de manera que pese a que los jueces internacionales son minoría, toda decisión debe ser aprobada por al menos uno de ellos. Los Fiscales son dos, uno de Cambodia y otro internacional. Los Fiscales trabajan juntos en el inicio de la investigación, la formulación de los cargos e incluso en las apelaciones<sup>223</sup>.

Los resultados más importantes de las Cámaras han sido el juicio de Kaing Guek Eav, alias ‘Dutch’, ex jefe de la rama interna de seguridad del gobierno “S-21” de Kampuchea Democrática; e igualmente, la investigación de cuatro líderes políticos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Proceso aún en curso<sup>224</sup>.

#### Tribunal Especial para Líbano

Rafic Hariri, ex Primer Ministro de Líbano -y otras 22 personas- fueron víctimas de un ataque mortal con bomba, detonada en el centro de Beirut el 14 de febrero de 2005. La influencia de Hariri era fuerte tanto en el Líbano como internacionalmente, en buena medida por su cercana relación con los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Arabia Saudita, vínculos que habían sido importantes para la expedición de la Resolución n° 1559 de 2004 en la cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reitera su “apoyo a la integridad territorial,

222 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 129.

223 Ibid.

224 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 90.

la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”<sup>225</sup>; e igualmente, pide que se retiren las fuerzas extranjeras presentes en Líbano<sup>226</sup>.

El asesinato tuvo como antecedente la mala relación entre Hariri, grupos pro-Siria y el contexto pre-electoral en el cual se encontraba Líbano. La muerte de Hariri desencadenó una serie de protestas clamando el retiro de Siria del territorio libanés, la creación de un tribunal internacional para investigar el asesinato y elecciones libres y democráticas. Como resultado de la presión, Siria se retiró del Líbano en abril de 2005, terminando de esa forma 30 años de presencia militar en el país<sup>227</sup>.

El Secretario General de las Naciones Unidas estableció una misión de investigación en febrero de 2005 y luego, el Consejo de Seguridad profirió la Resolución n° 1595 el 7 de abril del mismo año, en la cual autorizó la conformación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación (Uniiic). Pese a lo anterior, nuevos hechos de violencia se presentaron en Líbano durante 2005, los cuales incluyeron el asesinato de figuras políticas anti-sirias en hechos que cobraron también la muerte de civiles en general. En diciembre de 2005, el gobierno de Líbano escribió una carta al Consejo de Seguridad requiriendo el establecimiento de un tribunal internacional para la investigación del asesinato de Hariri, e igualmente, la ampliación en el tiempo de la presencia de la Uniiic<sup>228</sup>. Como consecuencia, el Consejo de Seguridad aprueba la Resolución n° 1664 de fecha 29 de marzo de 2006, solicitando al Secretario General negociar con el gobierno del Líbano “un acuerdo para establecer un tribunal de carácter internacional basado en las más altas normas internacionales de justicia penal”<sup>229</sup>. El acuerdo fue suscrito en 2007 con un esquema similar al diseñado para Cambodia, pero debido a la imposibilidad de superar el proceso interno de ratificación, el Consejo de Seguridad decidió forzar la aplicación del acuerdo bilateral creando una corte con base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (como en los casos

225 Organización de las Naciones Unidas. *Resolución 1559* (2004).

226 Ibid.

227 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 73

228 Ibid. pp. 73-74.

229 Organización de las Naciones Unidas. *Resolución 1664* (2006).

del TPIR y el TPIY) mediante Resolución nº 1757 de 2007, que entraría a regir el 10 de junio de ese año<sup>230</sup>.

El Tribunal es: “Competente para enjuiciar a los responsables del atentado del 14 de febrero de 2005, el cual causó la muerte del ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri, y provocó la muerte o lesiones a otras personas<sup>231</sup>. Adicionalmente, podría conocer de hechos cometidos entre el 1 de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005, si determina que estos tienen conexión con el ataque del 14 de febrero. El Tribunal Especial se compone de las Salas, el Fiscal, la Secretaría y la Oficina de Defensa. La Sala de Primera instancia se conforma por tres jueces, uno internacional y dos nacionales. La Sala de Apelaciones se compone de cinco jueces, dos nacionales y tres internacionales<sup>232</sup>. El Secretario General, previa consulta con el gobierno, designa al Fiscal por un periodo de tres años”<sup>233</sup>.

“A diferencia de otras cortes mixtas que aplican normatividad internacional, el Tribunal del Líbano solo aplica Derecho nacional. Principalmente, las disposiciones del Código Penal del Líbano relativas al enjuiciamiento y castigo de los actos de terrorismo, los crímenes y delitos contra la vida y la integridad personal, la asociación ilícita y la omisión del deber de informar sobre crímenes y delitos, incluidas las normas relativas a los elementos materiales del delito, la participación en el delito y la conspiración”<sup>234</sup>.

El artículo 4 del Estatuto del Tribunal establece la cláusula de competencia concurrente con los tribunales nacionales, de acuerdo con la cual, en su ámbito de competencia, el Tribunal tendrá primacía respecto de los tribunales nacionales de Líbano, de manera que con su establecimiento, el Fiscal del Tribunal tuvo competencia para exigir la remisión del caso 14 de febrero a la autoridad que hasta ese entonces, conocía de él<sup>235</sup>.

230 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 95.

231 Organización de las Naciones Unidas. *Resolución 1757* (2007).

232 Organización de las Naciones Unidas. *Resolución 1757* (2007), Anexo, art. 2.

233 Organización de las Naciones Unidas. *Resolución 1757* (2007), Anexo, art. 3.

234 *Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano*, art. 3.

235 *Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano*, art. 4,2.

La primera acusación se llevó a cabo de manera confidencial en junio de 2011. Cuatro acusados se encuentran en juicio<sup>236</sup>.

#### Corte Especial para Sierra Leona

A diferencia de otros conflictos que han tenido origen en disputas étnicas y han suscitado el establecimiento de Cortes o Tribunales Internacionales como los casos de la ex-Yugoslavia y Ruanda, en las atrocidades cometidas en Sierra Leona, el componente Tenme, Mende o Krio de su población no tuvo que ver específicamente. Este factor fue importante en la posterior creación de la Corte, por ejemplo, en el hecho que el genocidio no es competencia de la Corte<sup>237</sup>.

La Guerra Civil de Sierra Leona formó parte de una amplia crisis vivida en África en la cual Liberia y su expresidente Charles Taylor tuvieron mucho que ver, de manera que tuvo componentes nacionales e internacionales. Como antecedente, se tiene que desde su independencia en 1961, Sierra Leona ha sufrido de corrupción y gobiernos autoritarios. De hecho, entre 1967 y 1985 Sierra Leona fue gobernada por Siaka Stevens quien estableció un sistema político de un solo partido y se involucró en el negocio de la venta ilegal de diamantes. En 1985, Stevens renunció y dejó el poder al jefe militar, el Mayor General Joseph Momoh<sup>238</sup>.

Paralelo al gobierno de Momoh, Libia se convirtió en un campo de entrenamiento de ejércitos de África. Foday Sankoh, líder del Frente Unido Revolucionario (RUF, según sus siglas en inglés) fue entrenado allí junto a Charles Taylor. Ambos regresarían a sus países, Sierra Leona y Liberia respectivamente, para buscar la toma del poder. El RUF no parecía tener una ideología política definida más allá de oponerse al régimen de Sierra Leona, pero con todo y ello, invadió el Oriente del país en 1991, entrando vía Liberia donde a través Taylor y su Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL, según sus siglas en inglés) se le proporcionaron armas, tropas y un refugio seguro. Lo que brindaba Taylor al RUF sería a cambio de garantizar el tráfico de diamantes hacia su país,

236 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 79.

237 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* p. 31.

238 Ibid.

e igualmente, derrocar al gobierno de Momoh contrarrestaba el apoyo que este brindaba al gobierno de Liberia en contra de Taylor y el NPFL<sup>239</sup>.

Tanto el RUF como el NPLF practicaron atrocidades como amputaciones de las víctimas, o el reclutamiento de niños y niñas, a quienes se les suministraban drogas para que fueran más crueles en el campo de batalla, entre otras conductas. Tras la invasión de 1991, Momoh sería derrocado por un grupo de jóvenes oficiales al mando del capitán Valentine Strasser. Hacia mediados de los años noventa, Sierra Leona se encontraba colapsada. El RUF controlaba las lucrativas zonas de las minas en el Oriente en tanto que el gobierno no era exitoso en otras actividades económicas e incluso el ejército se quejaba de los bajos salarios que no justificaban la guerra contra el RUF, de manera que fue paulatinamente privatizado para garantizar seguridad privada en ciertas áreas y así mismo se crearon Fuerzas Civiles de Defensa que también reclutaron niños y niñas y cometieron crímenes graves<sup>240</sup>.

La comunidad internacional presionó al gobierno para que llevara a cabo elecciones democráticas, de manera que en 1996 Ahmad Tejan Kabbah salió elegido como presidente y pronto empezó a negociar con el RUF. El acuerdo de Abidjan se suscribió en noviembre de 1996 e implicaba un inmediato cese al fuego, la desmovilización del RUF y la concesión de una amnistía, pero nunca fue implementado porque no hubo verdadero apoyo para el efecto<sup>241</sup>.

Posteriormente, Kabbah fue derrocado por una cúpula militar en mayo de 1997, lo que desencadenó un nuevo periodo de violencia que duró nueve meses. La intervención militar internacional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas, según sus siglas en inglés) removió al gobierno golpista que se había aliado con el RUF y a principios de 1998 restableció el poder para el presidente Kabbah. El RUF, por su parte, continuó armado y llevando a cabo ataques en el Norte del país hasta que en 1999 las partes se citaron en una conferencia de paz en Lomé (Togo) con el auspicio de las Naciones Unidas,

239 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* P. 31-32.

240 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* pp. 32.

241 ROPER, Stiven, Barria, Lilian. *Op cit.* pp. 32-33.



Ecowas y el gobierno de Togo, lo que terminó con el Acuerdo de Lomé suscrito el 7 de julio de 1999<sup>242</sup>.

Dicho Acuerdo previó: el fin inmediato del conflicto; el establecimiento de una comisión de monitoreo del cese al fuego; la transformación del RUF en un partido político; la continuación de la Misión de Observación y del ‘peacekeeping’ de las Naciones Unidas. Acuerdos parcialmente implementados e incluso una Comisión de la Verdad y Reconciliación fue establecida en febrero de 2000. No obstante, la violencia volvió a iniciar en 2000 cuando el RUF atacó civiles y tomó como rehenes a miembros de la misión ‘peacekeeping’ de las Naciones Unidas, pero esta vez las hostilidades terminaron cuando el RUF perdió el apoyo de Liberia que fue presionado a expulsar a los miembros de ese grupo y cesar su apoyo al mismo. De esta manera, el RUF tuvo que someterse al Acuerdo y el anuncio oficial del final del conflicto se hizo el 14 de enero de 2002, con la desmovilización de aproximadamente 45.000 miembros del RUF. Nuevas elecciones fueron llevadas a cabo en mayo de ese año en las cuales Kabbah sería elegido nuevamente para un periodo de cinco años y el RUF no ganó ni siquiera una silla en el parlamento<sup>243</sup>.

El gobierno de Kabbah había hecho el requerimiento a las Naciones Unidas de crear una corte especial que conociera de los hechos sucedidos durante la Guerra Civil. Por tanto, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución n° 1315 del año 2000, en la cual solicita al Secretario General entrar en negociaciones con el gobierno de Sierra Leona lo que en efecto ocurriría suscribiéndose un acuerdo al que se adjuntaría el Estatuto de la Corte, el 16 de enero de 2002. Ulteriormente, Sierra Leona surtiría el proceso legislativo, y la Corte Especial para Sierra Leona empezaría labores en julio de 2002<sup>244</sup>.

La competencia personal y temporal de la Corte recae sobre los máximos responsables de las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a las normas de Sierra Leona cometidas en ese territorio desde el 30 de noviembre de 1996<sup>245</sup>. Como particularidad, el Estatuto se refiere a las eventua-

242 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 66.

243 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 67.

244 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 183.

245 *Statute of the Special Court for Sierra Leone*, art. 1, 1.

les transgresiones cometidas por los miembros de la Misión ‘peacekeeping’ en Sierra Leona, indicando que estas deben ser investigadas por el respectivo Estado, sin perjuicio que ante su falta de voluntad o de capacidad para adelantar las investigaciones, la Corte podría asumir las investigaciones con autorización del Consejo de Seguridad<sup>246</sup>.

La competencia material implica el conocimiento de crímenes de lesa humanidad, violaciones al artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 y al Protocolo Adicional II, otras graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y crímenes bajo la legislación interna de Sierra Leona<sup>247</sup>. Igualmente, el Estatuto contiene una cláusula de jurisdicción concurrente de acuerdo con la cual la Corte y los tribunales nacionales tienen jurisdicción concurrente, y donde la Corte Especial tendrá primacía sobre los tribunales nacionales, de manera que en cualquier instancia del proceso, la Corte Especial podría requerir formalmente a sus homólogos nacionales procesos para asumir la competencia<sup>248</sup>.

La Corte está compuesta por dos Cámaras: la de Juicios y la de Apelaciones, la Oficina del Fiscal y la Oficina de Registro. La Cámara de Juicios se compone de tres jueces, uno nacional y dos internacionales. La Cámara de Apelaciones se conforma por cinco jueces, dos nacionales y tres internacionales. Por su parte, el Fiscal es elegido por el Secretario General de las Naciones Unidas y es asistido por un Fiscal nacional<sup>249</sup>.

Por el hecho de haberse otorgado amnistías durante el proceso de paz, esta figura cobra relevancia en el caso de Sierra Leona. El artículo 10 del Estatuto señala que las personas a quienes fueron otorgadas amnistías, una vez se encuentren en jurisdicción de la Corte, perderán el beneficio respecto a los crímenes internacionales cometidos, es decir, los contemplados en los artículos 2 al 4 del Estatuto. En cambio, el beneficio se mantendrá ante la comisión de los delitos nacionales, artículo 5 del Estatuto.

La Corte ha judicializado un total de trece personas. Dos fallecieron durante el juicio. Ocho fueron condenados a prisión con penas que oscilan entre los 15

246 *Statute of the Special Court for Sierra Leone*, art. 1,2-3.

247 *Statute of the Special Court for Sierra Leone*, arts. 2 – 5.

248 *Statute of the Special Court for Sierra Leone*, art. 8.

249 *Statute of the Special Court for Sierra Leone*, arts. 12 and 15.

y 50 años. El juicio más representativo ha sido la condena en 2012 contra el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por apoyar los grupos ilegales en Sierra Leona<sup>250</sup>, sentencia confirmada en segunda instancia con una pena de 50 años de prisión, en la que se destaca la condena por el crimen de reclutamiento forzado de niños y niñas.

### *Tribunales fuera del Sistema de Naciones Unidas*

#### Cámara para Crímenes de Guerra de Bosnia y Herzegovina

Tras la firma en 1995 de los Acuerdos de Paz de Dayton, con los cuales se puso fin al conflicto en Bosnia y Herzegovina, el país se dividió en dos sub entidades, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, el Acuerdo no creó un tribunal con la capacidad de juzgar los crímenes cometidos durante la guerra, y en su lugar motivó el apoyo a la comunidad internacional en los esfuerzos por hacer justicia y en particular, en la labor del TPIY, cuyo trabajo cuenta con un respaldo adicional en la Constitución de Bosnia, artículo IX, el cual obliga a las autoridades a cumplir las órdenes de cooperación judicial proferidas por el Tribunal. No obstante, transcurridos siete años después del Acuerdo, la impunidad reinaba en Bosnia, la mayoría de los sospechosos de cometer crímenes graves permanecían inmunes<sup>251</sup>.

En mayo de 2002, la Oficina del Alto Representante para Bosnia encargado de la implementación de aspectos civiles de los Acuerdos de Dayton, preparó una compleja reforma al sistema de Administración de justicia bastante ambiciosa, la cual implicó la reestructuración de las Cortes y los Fiscales e incluso reasignaciones a nivel nacional. La reforma incluyó la creación de las Cámaras para Crímenes de Guerra en la Corte Estatal de Bosnia y Herzegovina que tiene jurisdicción en las dos entidades, como parte también de la estrategia de conclusión del TPIY<sup>252</sup>.

250 *From Nuremberg to The Hague. The road to the International Criminal Court*. Nuremberg: Nuremberg Human Rights Center, 2011, p. 44.

251 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 96.

252 *Ibid.* pp. 97.

Las Cámaras fueron inauguradas oficialmente el 9 de marzo de 2005. Su jurisdicción se estableció para investigar y juzgar casos transferidos del TPIY bajo la Regla 11 bis de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal, en especial, casos de connotación nacional. La Corte y la Oficina del Fiscal son órganos independientes creados mediante legislación nacional. La Corte está compuesta por tres divisiones: Criminal, Administrativa y de Apelaciones. Dentro de las Divisiones Criminal y de Apelaciones, dos Cámaras fueron creadas, Cámara I para Crímenes de Guerra y la Cámara II para Crimen Organizado, Económico y Corrupción. Durante cinco años jueces internacionales de la Cámara I fueron nombrados por la Oficina del Alto Representante. La Cámara de Crímenes de Guerra de la División Criminal se compuso de cinco paneles híbridos. Cada panel compuesto de tres jueces: dos internacionales y uno nacional. La Cámara de Crímenes de Guerra de la División de Apelaciones consistió -de igual forma- en un panel compuesto por tres jueces: dos internacionales y uno nacional<sup>253</sup>.

La competencia material de las Cámaras corresponde a la legislación interna de Bosnia, y conoce de más graves crímenes relacionados con la guerra en Bosnia; pero no tiene jurisdicción exclusiva o superior sobre crímenes de guerra que son igualmente perseguidos por las Cortes de Distrito y de Cantón. El Código penal aplicado por las Cámaras define también genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra<sup>254</sup>.

Como ejemplo del volumen y forma de trabajo, se puede mencionar la cifra arrojada en 2011 cuando la Cámara I llevó a cabo 41 juicios, entre ellos varios casos transferidos desde el TPIY. Pese a lo controvertido de las Cámaras, estas son consideradas un buen ejemplo de cooperación entre Cortes nacionales e internacionales<sup>255</sup>.

#### Suprema Corte de Irak

La llegada al poder de Saddam Hussein en Irak implicó un exterminio de la oposición e incluso de miembros de su propio partido que se consideraran traidores,

253 FIDELMA, Donlon. *Op cit.* pp. 97.

254 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 195.

255 *From Nuremberg to The Hague. The road to the International Criminal Court*. Nuremberg: Nuremberg Human Rights Center, 2011, p. 45.

con lo cual se empezó a evidenciar lo que sería un régimen de violencia. Entre otras medidas, se persiguieron minorías como los kurdos y los demás que se consideran desleales con el régimen. Aunque no hay cifras oficiales, se considera que régimen asesinó alrededor de 500.000 personas entre 1998 y 2003<sup>256</sup>.

El régimen de Hussein terminó cuando Irak fue invadido por Estados Unidos y Reino Unido. Con el comunicado del fin de la intervención el 1 de mayo de 2003 y sin un sucesor aparente en la presidencia del país, Estados Unidos y Reino Unido establecieron una Autoridad Provisional de Coalición. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptaría la Resolución nº 1483 de 2003, en la cual reconocería la Coalición como poderes ocupantes del territorio de Irak, a los cuales les serían exigibles las obligaciones en materia de Derechos Humanos y demás normas de Derecho Internacional. Igualmente, la Resolución afirmó la necesidad de impartir justicia por los crímenes cometidos durante el régimen de Hussein en Irak así como la instauración de una administración interina<sup>257</sup>. Como consecuencia de este último requerimiento, la Coalición designó 25 iraquíes como el Consejo Iraquí de gobierno<sup>258</sup>.

A diferencia de lo sucedido en Kosovo y Timor Oriental, la intervención de las Naciones Unidas fue muy moderada, de manera que los términos de la resolución enfatizaron las labores de apoyo a las autoridades de Irak, pero en su lugar, la Coalición ejerció gran influencia en el proceso post dictadura, de manera que esta fue la que enfrentó las posibles alternativas al tema de la justicia por los crímenes del régimen. El gobierno de los Estados Unidos consideró que el Tribunal en Irak sería más aceptable si: fuese administrado por iraquíes; proveyera las bases para un sistema doméstico legal fuerte; y enviase un mensaje de represión a la población civil para disuadir la tolerancia a los crímenes<sup>259</sup>.

En 2003 ya había un borrador para el Estatuto de la Corte Suprema de Irak y en diciembre sería promulgada por la administración interina, primera gran diferencia con los tribunales estudiados en la medida en que no fue fruto de una

256 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 109-110.

257 Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, *Resolución 1483* (2003).

258 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 111.

259 WILLIAMS, Sarah. *Op. cit.* pp. 115.

resolución de las Naciones Unidas, ni de un tratado internacional, ni una decisión unilateral de los poderes ocupantes<sup>260</sup>.

La competencia de la Corte recae sobre ciertos crímenes cometidos en Irak o en otro lugar, entre el 16 de julio de 1968 y el 1 de mayo de 2003, por nacionales o residentes de Irak. Llama la atención que miembros de la Coalición quedan excluidos de la competencia de la Corte. Los crímenes de su jurisdicción son genocidio, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra definidos, casos exactos a como se encuentran en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aunque no se encontraban previamente incorporados en el ordenamiento jurídico interno de Irak. Igualmente, cubre algunos crímenes de derecho interno relacionados con abuso de poder<sup>261</sup>.

La Corte también ejerce la regla de la competencia concurrente con primacía sobre los demás tribunales internos de Irak y puede incluso asumir un caso que ya haya sido conocido o esté en conocimiento de otro tribunal. La Corte está compuesta solamente por jueces y fiscales nacionales de Irak, designados por la autoridad nacional, aunque se permitiría un juez no iraquí solo en caso de que el juicio implique participación de otro Estado. Como otra diferencia significativa con otros tribunales *AD-HOC*, se tiene que este aplica la pena de muerte, lo que ha disuadido en parte el apoyo internacional<sup>262</sup>.

El primer y más importante juicio se adelantó contra Saddam Hussein y otros altos oficiales. Hussein fue sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad, aunque no por los más graves que al parecer había cometido, y posteriormente, fue ejecutado en la horca. La Corte ha continuado su trabajo sumando varias condenas que implican entre otros, ataques masivos a la población kurdos en los años ochenta, aunque los juicios han sido criticados por falta de independencia judicial, garantías al debido proceso y ausencia de publicidad para la población iraquí<sup>263</sup>.

260 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst *Op. cit.*, p. 196.

261 Ibid.

262 Ibid. pp. 196-197.

263 CRYER, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson y Elizabeth Wilmshurst. *Op. cit.*, p. 197.